



RESOLUCIÓN PA-87/2019, de 18 de marzo del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Asunto: Denuncia presentada por XXX, en representación de XXX, por presunto incumplimiento del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de obligaciones de publicidad activa reguladas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (Denuncia núm. PA-131/2017).

ANTECEDENTES

Primero. El 7 de julio de 2017 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) una denuncia planteada por XXX, basada en los siguientes hechos:

“En el BOP de fecha 19 de junio de 2017 aparece el anuncio del AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) que se adjunta, por el que se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio económico de 2016.

“En el anuncio no se menciona que el documento está en el portal de la transparencia, sede electrónica o página web del Ayuntamiento, y de hecho, hemos podido comprobar que no está. Esto supone un incumplimiento del artículo 7.e) de



la Ley 9/2013 [*sic*, debe entenderse Ley 19/2013] y del artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014 de Andalucía".

El escrito de denuncia se acompañaba copia del texto del anuncio publicado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla núm. 139, de 19 de junio de 2017, donde se anuncia que "[h]abiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento [...] la cuenta general correspondiente al ejercicio económico de 2016 [...] queda expuesta al público en la Intervención Municipal, (plaza del Duque, n.º 1) junto con sus justificantes y el citado informe por plazo de quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Diario Oficial» de la provincia [...]."

Igualmente se aportaba copia de una pantalla (no se aprecia fecha de la copia ni entidad a la que pertenece), aparentemente de la web del citado Ayuntamiento, correspondiente a un "Tablón de Anuncios", en la que no se incluyen referencias respecto a la publicación de la Cuenta General mencionada.

Segundo. El 14 de julio de 2017 el Consejo concedió al órgano denunciado un plazo de 15 días al objeto de que formulara las alegaciones que estimara oportunas, así como para que aportara los documentos y justificaciones que considerara pertinentes.

Tercero. El 28 de julio de 2017, en contestación al requerimiento anterior, tiene entrada en el Consejo escrito del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra efectuando las siguientes alegaciones:

"Mediante dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento [...] se informó favorablemente la cuenta general del ejercicio de 2016 [...].

"Con fecha 13 de junio de 2017 se remitió anuncio relativo al citado dictamen para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, así como a las correspondientes secciones del Tablón de Anuncios y al Portal de Transparencia Municipales de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible a través de Internet en la dirección electrónica <http://ciudadalcala.sedelectronica.es>.

"El citado anuncio fue publicado en el BOP n.º 139, de 19 de junio de 2017, cuya copia se adjunta, en el que consta el referido código seguro de verificación, el cual permite comprobar la validez del documento aprobado (la cuenta general 2016) introduciendo dicho código en el apartado VALIDAR DOCUMENTO de la referida sede electrónica, así como descargarlo en formato pdf. para su consulta sin necesidad de desplazarse a la sede de esta Corporación Local.



"[...] El mismo anuncio publicado en el BOP ha estado publicado en el espacio del Tablón de Anuncios Municipales de la referida sede electrónica, conforme a la certificación que se adjunta.

"Finalmente, el mismo anuncio publicado en el BOP y en el Tablón de Anuncios municipales fue incluido el día 13 de junio de 2017 en el citado Portal de Transparencia Municipal (3. NORMATIVA E INFORMACIÓN JURÍDICA/3.5 DOCUMENTOS EN TRAMITACIÓN SOMETIDOS A INFORMACIÓN PÚBLICA) conforme se acredita con la documentación que se adjunta, y donde aún permanece, como se puede comprobar accediendo a la referida dirección electrónica".

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. La competencia para la resolución de la denuncia interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.3 b) de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre), y en el artículo 48.1 g) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA), en conexión con el artículo 23 del mismo texto legal.

Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del citado Decreto 434/2015, "*[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad*", con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras.

Segundo. Como establece el artículo 2 b) LTPA, la publicidad activa consiste en "*la obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de hacer pública por propia iniciativa, en los términos previstos en la presente ley, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública*". Exigencia de publicidad activa que comporta que la información "*estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web*" de los sujetos obligados al cumplimiento de la ley (art. 9.4 LTPA), y que tal publicación se realice "*de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada*" (art. 9.1 LTPA).



Pero no solo constituye una obligación para las entidades sujetas al cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, pues, según establece el artículo 7 a) LTPA, la publicidad activa constituye igualmente un *“derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen [...] de forma periódica y actualizada la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.”*

Tercero. En el asunto que nos ocupa, se denuncia el incumplimiento de lo previsto en el artículo 13.1 e) LTPA -precepto que reproduce literalmente la exigencia ya impuesta por el legislador básico en el art. 7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, LTAIBG), que también es invocado en la denuncia-, por la ausencia de publicidad activa en la exposición al público de forma telemática de la Cuenta General del ejercicio 2016 correspondiente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, durante el período en que fue sometida la correspondiente documentación al trámite de información pública.

La obligatoriedad de la apertura de dicho periodo para la presentación de posibles alegaciones se establece en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que en su artículo 212.3 dicta que *“[l]a cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones”*. Dado que la normativa sectorial mencionada exige este periodo de información pública, se convierte también en una exigencia de publicidad activa la publicación en sede electrónica, portal o página web del órgano concernido, de acuerdo con lo establecido en el ya mencionado artículo 13.1 e) LTPA, que dicta que han de publicarse telemáticamente *“los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación”*.

La publicidad activa derivada de la normativa de transparencia supone ofrecer a la ciudadanía la ocasión de conocer los mismos documentos que son expuestos presencialmente pero a través de su difusión en la página web del órgano concernido. Esta exigencia de publicidad supone un significativo paso adelante en cuanto a transparencia de la actuación pública en el proceso de aprobación de las disposiciones y actuaciones administrativas que favorece -qué duda cabe- no solo un mayor alcance, difusión y conocimiento por la ciudadanía de esas actuaciones, sino también la participación efectiva de ésta en la toma de decisiones, y supone un claro avance en el acceso a la información respecto a la normativa anterior, que hacía escasa, o casi nula, la posibilidad de participación de los ciudadanos, e incluso dificultaba el mero conocimiento de la información. Es muy notable, como



resulta obvio, la diferencia que entraña que el órgano sólo exhiba los documentos de que se trate a quien acuda físicamente a la sede del órgano, y en las horas que éste decida, a que pueda ser accesible, según prevé el art. 9 LTPA, a través de las correspondientes sede electrónica, portal o página web.

Por otra parte, el artículo 16 b) LTPA establece la obligación de los sujetos obligados por dicha Ley de hacer pública "*[las] cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellas se emitan*". Así, con independencia de hacer pública de forma telemática la documentación relativa a la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 mientras se somete al trámite de información pública [art. 13.1. e) LTPA], dicha documentación, una vez aprobada definitivamente, también ha de formar parte de la publicidad activa de los sujetos obligados en virtud del mencionado art. 16 b) LTPA.

No obstante, en el caso examinado por la presente Resolución, la denuncia se refiere al incumplimiento del art. 13.1 e) LPTA, es decir, a la falta de publicidad activa durante el trámite de información pública, y no a la posterior publicación telemática de la Cuenta Anual, una vez aprobadas.

Cuarto. En su escrito de alegaciones, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra manifiesta que el 13 de junio de 2017 se remitió el anuncio relativo a la cuenta general y al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas para su publicación en el BOP de Sevilla y a las correspondientes secciones del tablón de Anuncios y al Portal de Transparencia Municipal de la sede electrónica de esa entidad, accesible a través de Internet (indica dirección). El citado anuncio se publicó el 19 de junio de 2017 y, según nos indican en las alegaciones, el mismo anuncio publicado en el BOP ha estado publicado en el espacio del Tablón de Anuncios Municipales de la sede electrónica.

Así pues, del tenor literal de lo expresado en las alegaciones únicamente podemos deducir que se publicó el anuncio del trámite de información pública en sede electrónica pero no así la propia Cuenta General y demás documentación asociada.

Por lo tanto, este Consejo no puede sino concluir que, en sintonía con lo expresado en la denuncia, no se dio adecuado cumplimiento al artículo 13.1 e) LTPA durante el período de información pública, por cuanto el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra debió haber publicado telemáticamente durante el mismo la documentación relativa a la mencionada Cuenta General, y no solo el anuncio de la existencia de dicho periodo, por lo que ha de requerir a dicho Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa relativas a la publicación en sede electrónica, portal o página web a este respecto.

Por otra parte, este Consejo ha podido comprobar (fecha de acceso 27/02/19), a través del portal estatal "*rendiciondecuentas.es*", cómo la Cuenta General de 2016 del Ayuntamiento de



Alcalá de Guadaíra, fueron definitivamente aprobadas el 28 de septiembre de 2017. Así, comoquiera que en el asunto examinado no cabe subsanar la mencionada falta de publicación telemática, por cuanto el Ayuntamiento ya ha procedido a la aprobación definitiva de la Cuenta General 2016, el requerimiento que se ha de realizar al mismo está referido a aquellas actuaciones que tengan lugar en el futuro, dado que no entra en el ámbito de las atribuciones de este Consejo la función de dictar un acto de revocación de las resoluciones de publicación de actos y disposiciones en los respectivos diarios oficiales cuyos plazos de información pública ya hayan vencido y se haya procedido a su aprobación definitiva, como sucede en el presente caso.

Es por ello por lo que ha de requerirse al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para que, en lo sucesivo, lleve a cabo la publicación de los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Es oportuno señalar además que, conforme a lo previsto en el art. 52.1 a) LTPA, el incumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en el Título II LTPA, cuando se haya desatendido el requerimiento expreso de este Consejo, puede suponer una infracción muy grave, con las posibles sanciones previstas en el artículo 55.2 c) LTPA, que pueden alcanzar al cese del cargo responsable y a no poder ser nombrado en cargos similares por un período de hasta tres años.

Quinto. Finalmente, resulta oportuno realizar unas consideraciones respecto a las obligaciones derivadas de la publicidad activa para que se tenga en cuenta, *ad futurum*, por el órgano denunciado.

En primer lugar, como prevé el artículo 9.3 LTPA, en la publicidad activa *"[s]erán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en la normativa básica y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación de los mismos"*. Esto se traduce en que el órgano responsable de cumplir las obligaciones de publicidad activa previstas en el Título II LTPA podrá retener, motivadamente, la información cuando considere que sean de aplicación alguno de los límites previstos en el artículo 14 LTAIBG; o proceder a la disociación de los datos que deban disponer de especial protección de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 LTAIBG y en la normativa sobre protección de datos personales.

Por otro lado, resulta pertinente recordar que, en virtud de lo preceptuado en el artículo 9.4 LTPA, la información objeto de publicidad activa deberá estar disponible en la sede electrónica, portal o página web, *"garantizando especialmente la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en*



igualdad de condiciones...”; así como que, según lo previsto en el artículo 6 k) LTPA, “se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización”, por lo que se deberá tender a evitar proporcionar la información en archivos que necesiten para su utilización el empleo de programas sujetos a marca comercial.

En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos se dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Única. Requerir expresamente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para que, en lo sucesivo, lleve a cabo en sede electrónica, portal o página web la publicación de los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Manuel Medina Guerrero

Esta resolución consta firmada electrónicamente